

MESA DE TRABAJO SOBRE SITUACIÓN PENITENCIARIA

(Reunión del día 17 de mayo de 2024)

SEÑORA MODERADORA (Gianina Podestá).- Damos inicio a la reunión.

(Es la hora 14 y 22)

—Soy Gianina Podestá, del Mecanismo Nacional de Prevención, que funciona en el ámbito de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

En el día de hoy, damos comienzo a una nueva reunión de esta Mesa de Trabajo, como nos hemos llamado, sobre la situación del sistema penitenciario.

Quiero agradecerles a todos y a todas. En realidad, estamos acá gracias a que ustedes también pueden estar acá. Sabemos el esfuerzo que representa para cada una de nosotras y cada uno de nosotros estar aquí.

Informo para los nuevos que estas instancias surgen a partir de una declaración conjunta entre el comisionado parlamentario y la Institución Nacional de Derechos Humanos luego del incendio ocurrido en el Módulo N° 4 del Comcar. A partir de ese hecho, empezamos a convocarnos para buscar líneas de trabajo interinstitucionales, a fin de dar, en algún momento, alguna respuesta o, por lo menos, dialogar acerca de una situación que es muy problemática en nuestro país.

En las instancias anteriores ustedes recibieron una invitación en la que figuraban varios puntos a abordar. El primero es sobre cuestiones de hacinamiento y superpoblación. Dentro de este punto hay tres preguntas que, en parte, fueron contestadas en la primera sesión. Hoy nos quedaría la segunda de las sesiones.

Quiero contarles también que en la instancia anterior contamos con un documento elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención que incluía unos temas disparadores que daban cuenta de las situaciones relacionadas con el hacinamiento, con algunos problemas que tenían que ver con las definiciones de cupo y plaza: que la situación de incorporar o aumentar la cantidad de cupos no es lo mismo que incorporar o aumentar la cantidad de camas, que el aumento de plazas no es una solución; de las dificultades que pueden implicar algunas leyes que pueden ser regresivas en algunos momentos y que pueden llegar a generar un impacto negativo en términos de hacinamiento o superpoblación penitenciaria; de las dificultades en torno a la utilización de medidas alternativas o a las situaciones relacionadas con la redención de la pena, y finalmente, de las dificultades en cuanto a la ratio entre cantidad de personal y cantidad de personas privadas de libertad, el acceso a la educación y oportunidades laborales.

Esos eran algunos de los temas que traía el documento.

A quienes están aquí por primera vez les pido que en la hoja que está circulando pongan su nombre, la institución a la que pertenecen, su *e-mail* y el teléfono de contacto.

También les comento que una vez que esté pronta la versión taquigráfica, como lo hicimos la vez anterior, se la vamos a enviar para poder seguir trabajando.

A continuación vamos a realizar una ronda de presentación y luego Santiago realizará un resumen de lo que se estuvo trabajando en la reunión anterior.

SEÑORA GONZÁLEZ (Claudia).- Soy defensora de oficio; defensora pública de ejecución penal. Trabajo acá, en Montevideo.

Nos llegó la invitación el miércoles. Estoy acá con mucha expectativa y agradecida por que nos hayan convocado y poder aportar todo desde mi experiencia. En lo personal, asisto a cerca de cuatrocientas personas privadas de libertad y a doscientas que están con medidas alternativas de libertad a prueba, pero eso lo hablamos después. Ahora solo me presento para no ocupar tiempo.

SEÑOR DELPRATO (Pedro).- Vengo en representación de Anong.

SEÑORA VIGNA (Ana).- Represento a la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.

SEÑOR REPRESENTANTE MATO (Verónica).- Soy diputada por el Frente Amplio e integro la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria.

SEÑORA PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES (Ana María Olivera Pessano).- Soy diputada y presidenta de la Cámara. Más que nada vengo como respaldo de la actividad.

SEÑOR SOSA (Santiago).- Soy sociólogo asesor de la Oficina del comisionado parlamentario.

SEÑOR PETIT (Juan Miguel).- Soy el comisionado parlamentario.

SEÑORA FERNÁNDEZ (Jimena).- Soy directora de la Institución de Derechos Humanos.

SEÑORA RIEPHOFF (Graciela).- Pertenezco a la oficina del comisionado parlamentario.

Quisiera saber si a todos les llegó la versión taquigráfica y el material que mandaron la Institución y Familias Presentes. Si no es así, lo enviamos ahora a quien le falte.

Quiero comentarles que algunas instituciones decidieron no seguir participando, como las tres personas que venían en representación del Instituto Nacional de Rehabilitación. En el día de hoy, la gente que participaba por ASSE SAI-PPL no puede concurrir, pero sí va a seguir participando, y Familias Presentes llega más tarde. Esas son las confirmaciones que tenemos hasta ahora.

SEÑOR PETIT (Juan Miguel).- Traté de hablar con quienes plantearon el tema de que les costaba venir a una reunión en representación de un organismo porque luego debían ratificar una especie de concepto general en un documento final de consolidación de lo trabajado. Les dije que comprendía eso, pero que me parecía que estábamos a tiempo de que participaran de las

reuniones, que era importante escuchar todas las voces e intercambiar y que el documento que va a hacer la mesa técnica va a buscar el arte de la sintonía, la sinergia y los puntos en común, y en nada va a competir con algunas cosas que hay, como es la estrategia de reforma penitenciaria que lleva adelante un área del Ministerio del Interior con el Banco Interamericano. Creo que Ana Vigna está trabajando en eso y preparando un documento que se dice que tiene un parentesco con esto aunque con otra lógica, con una metodología diferente y quizás también con otra profundidad, porque es un documento de tipo estudio académico profundo, pero esto en nada compite con eso. Entonces, me parecía que podían asistir y, en todo caso, cuanto tuviéramos el documento, evaluar si lo firmaban o no. Quedaron en que lo iban a pensar.

La semana que viene estoy invitado a una reunión del Consejo de Política Criminal. Ya se nos van a ir un poco los tiempos, pero lo mismo les voy a plantear a la Fiscalía y al Poder Judicial, porque nos han quedado un poco por fuera. Esto lo digo a los efectos de que nunca es tarde si la dicha es buena y capaz se pueden sumar en algún momento.

SEÑORA RIEPHOFF (Graciela).- Disculpen, me olvidé de comentar que también la Fiscalía y el Poder Judicial decidieron no concurrir; ya la vez anterior no concurren y el Consejo de Política Criminal nunca se sumó, o sea, desde la primera vez no concurre.

SEÑORA MODERADORA.- Quiero aclarar algunos puntos.

Si bien el Poder Judicial y la Fiscalía no concurren, nosotros invitamos a la Asociación de Magistrados, a la Asociación de Magistrados Fiscales, que todavía no respondieron, pero vamos a seguir insistiendo. Agradecemos a la Asociación de Defensores Públicos que sí hayan venido hoy.

Para hoy también estaban convocados Serpaj y Amnistía Internacional Uruguay -tengo que revisar el correo porque estaban intentando enviarnos un documento-, pero, como bien mencionaba la diputada Mato más temprano, son personas que forman parte y trabajan en otras cosas también y se les complicaba venir, pero iban a hacer lo posible por enviar un documento, sin perjuicio de ser invitados *a posteriori* en otras instancias que entendamos que sea relevante contar con su presencia en particular, además de Anong, que sí forma parte de esta Mesa en forma permanente.

SEÑOR DELPRATO (Pedro).- Amnistía también es socia y quedó de enviarnos el documento, justamente, para integrarlo un poco a la propuesta en general.

Después, quería consultar qué pasó con estas instituciones que dijeron que no iban a participar más; si nos pueden comentar un poco más a qué se debe su autoexclusión.

SEÑOR PETIT (Juan Miguel).- Esto es lo que recién mencionaba: dijeron que les parecía que enviar una representación a una instancia en la que habría un documento que se firmaría, como los participantes después tenían que recibir el aval de sus jerarcas, los podía colocar en una posición incómoda, en el sentido de que lo que fueran a decir se podría mezclar su posición personal, su posición desde su lugar de trabajo con lo que podía ser la perspectiva de las autoridades. Esto lo digo en relación al Poder Judicial, a la Fiscalía y al Instituto Nacional de Rehabilitación. En los tres casos, abogamos para que participaran

y apostáramos a tener un documento de acuerdos, pero podría ser muy entendible que hubiera gente que no lo firmara. De todas formas, el documento en sí mismo va a valer aunque solo lo firmemos algunas instituciones y algunos representantes; el documento es un aporte en sí mismo. Quienes estamos más en la mesa técnica, juntando material, tenemos mucha fe en que el documento va a ser un aporte; no va a ser la verdad revelada ni nada que se le parezca, pero es un aporte más y el hecho de que haya gente de varias organizaciones haciendo el esfuerzo por venir a estas reuniones y estar aquí presente creo que es muy bueno. Así que en eso estamos. Capaz que todavía estamos a tiempo de lograrlo, porque algunos ya se subieron y se bajaron varias veces, pero en esta nave cuantos más pasajeros haya, mejor; vamos a hacer todo lo posible. Inclusive, también alguna otra institución tuvo algunos temas formales relativos a la nota, por ejemplo a quién iba enviada, pero hemos tratado de resolverlo, como lo hicimos en el caso de la Universidad y de otras instituciones.

También puede pasar que antes de que cerremos esta parte presencial, identifiquemos alguna otra persona o institución; creo que en la última reunión hablamos de que había algunas personas que no representan a instituciones, sino a sí mismos, porque trabajaron en las cárceles, en el Patronato, en el INR o en ONG, con las que puede estar bueno hacer alguna reunión. Por ejemplo, habíamos mencionado a Luis Parodi, Jaime Saavedra y Ana Juanche, que de pronto hoy no representan a ninguna institución, pero por su trayectoria se representan a sí mismos. La idea sería tener una reunión con ellos para enviarles las preguntas y, en fecha a determinar, poder escucharlos.

SEÑORA FERNÁNDEZ (Jimena).- De hecho, acordamos eso y probablemente la semana que viene vamos a estar pidiendo que venga alguno de ellos.

SEÑORA MODERADORA.- Quiero hacer un aviso parroquial: nos acaba de llegar la respuesta de Serpaj por escrito a las tres preguntas. Así que una vez que empecemos con la discusión de la tercera de las preguntas, relativa al primer punto planteado para estas dos reuniones, le daremos lectura, es muy breve, para que también este aporte -sin perjuicio de poder agregarlo luego, además de enviarlo y compartirlo por correo- quede incorporado en las versiones taquigráficas.

SEÑORA REPRESENTANTE MATO (Verónica).- Con respecto a lo que se comentaba de que no pueda participar el IRN, primero, quiero decir que yo leí la versión taquigráfica de la reunión pasada -no pude asistir porque me encontraba en el exterior en misión parlamentaria- y lo que se recoge de lo que dicen los integrantes del INR, que tienen responsabilidades y saben bien de lo que están hablando, me resultaron muy potentes y sirven mucho para tener una mirada acerca de esta problemática y de esta situación. Así que lamento que no puedan participar, pero lo entiendo perfectamente. Lo que sí debo decir es que agradezco los insumos que nos dejaron en la reunión pasada, así como también los que nos dejó el personal de SAI-PPL.

SEÑOR SOSA (Santiago).- Continúo con algunos de los temas de la jornada anterior; Gianina ya adelantó algunos. Se intentó dar respuesta a las primeras preguntas sobre el hacinamiento: "¿Qué medidas considera prioritarias para una reducción del hacinamiento carcelario?". Se señalaron los proyectos sobre nuevas cárceles y la construcción de nuevas plazas, pero también se comentó la insuficiencia y la falta de recursos que hay para cubrir ese rezago,

particularmente si se continúa con el ritmo de crecimiento de la población penitenciaria.

Por lo tanto, se concluye que ese no es por sí solo un camino de solución a este problema. Además, se comenta que, por lo general, entre las medidas para reducir el hacinamiento, se tiende a pensar inmediatamente en construir más plazas penitenciarias o refaccionar las que están inhabilitadas, pero según datos del INR, hoy tenemos lugar para una taza de prisionización de 366 personas cada 100.000 habitantes, y esa cifra triplica la taza mundial de prisionización. Es decir, la capacidad construida que tenemos al día de hoy es muy superior al promedio de la prisionización mundial, lo que da cuenta de que el número de personas privadas de libertad que podríamos tener hoy, sin tener hacinamiento, ya es muy alto.

Entonces, se plantea como respuesta alternativa la posibilidad de una mayorización en las alternativas, repensar la redención de la pena y la dotación de mayor personal y presupuesto. Se señala que se deberían accionar transformaciones legislativas que redujeran la población a través de medidas alternativas o reduciendo la pena a través de la redención. Se señala la necesidad de trabajar para evitar la reincidencia a través de políticas de trabajo, de educación, de salud, y la necesidad de trabajar en programas de egreso para combatir la reincidencia.

Otra dimensión de la respuesta que ya se trabajó en la jornada pasada fue la necesidad de trabajar en la etapa presentencial con una evaluación del perfil de la persona para considerar si es más eficaz una medida alternativa a la prisión.

Se necesita que el eje del sistema penal no sea la cárcel. Para ello se debe pensar en hablar de la ejecución penal y no del sistema penitenciario, a fin de sacar a la cárcel del centro de la sanción penal. Se debe considerar a la prisión como la última ratio.

¿Qué política criminal quiere Uruguay? La pregunta principal es si la política criminal va a tener solamente un enfoque punitivo o si va a tener una mirada más integral que aborde estos problemas. La política de las últimas décadas ha llevado a esta situación de crisis y necesita transformarse.

Este fue un resumen de los comentarios para ir avanzando en lo que va a ser el documento final, también como para ir pensando qué cosas que no están se pueden ir agregando y profundizar sobre estos temas.

También quedaron otras preguntas sobre este primer núcleo temático de hacinamiento, como por ejemplo: ¿qué medidas se deberían instrumentar para fortalecer los mecanismos de egreso o para evitar el ingreso y/o la reincidencia a la cárcel?

También se puede hablar de las otras preguntas, como ¿qué papel pueden desempeñar las medidas alternativas a la prisión?

SEÑORA MODERADORA.- Si les parece, podemos comenzar con una ronda de respuestas, por si quedó algo de la pregunta 2 que hubieran anotado en la sesión anterior, como para terminar y, principalmente, dar una respuesta a la pregunta 3.

Voy a dar lectura a las tres preguntas: "1. ¿Qué medidas considera prioritarias para la reducción del hacinamiento carcelario?

2. ¿Qué papel considera que pueden desempeñar las medidas alternativas a la privación de libertad?

3. ¿Qué medidas se deberían instrumentar para fortalecer los mecanismos de egreso o para evitar el ingreso y/o la reincidencia a la cárcel? (Suspensión condicional de la pena, libertad anticipada, redención de la pena, políticas sociales)".

La idea es poder abordar en el día de hoy, principalmente, la pregunta 3, pero quedan abiertas las consideraciones con respecto a las anteriores, si hubiera faltado algo, o en el caso de que quienes están concurriendo por primera vez quieran hacer algún aporte un poco mayor.

SEÑORA PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES (Ana María Olivera Pessano).- Creo que nos decías que tenés el documento del Serpaj, que da respuesta a las tres preguntas. Capaz que sería bueno leer el documento completo.

SEÑORA FERNÁNDEZ (Jimena).- Capaz que el documento completo no, porque son cuatro o cinco hojas, pero -si nos vamos a concentrar en la tercera pregunta; como ustedes quieran- sí podemos leer la parte relativa a la tercera pregunta y tomar eso como puntapié. ¿Les parece?

SEÑORA PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES (Ana María Olivera Pessano).- Me interesaba la segunda, porque íbamos a redondear sobre eso.

SEÑORA FERNÁNDEZ (Jimena).- Perfecto; nos referimos a la segunda entonces.

(Diálogos)

SEÑORA MODERADORA.- Dando lectura al informe o respuesta del 17 de mayo del Servicio Paz y Justicia, respecto a la segunda pregunta: "¿Qué papel considera que pueden desempeñar las medidas alternativas a la privación de libertad?", entiendo yo, tal como está escrito, que no quedó la respuesta.

Quedó sí la respuesta en relación a la primera, que es sobre las medidas que consideran prioritarias.

Es muy corta, voy a darle lectura:

"1. ¿Qué medidas considera prioritarias para una reducción del hacinamiento carcelario? En general:

- Armonizar la normativa nacional a las Convenciones y Tratados internacionales [...], promoviendo medidas alternativas a la privación de libertad (como fuera observado por el Comité de Derechos Humanos en su quinto informe periódico de Uruguay en 2013 párrafo 9, y en las recomendaciones recientes del CAT), y un sistema de privación de libertad basado en unidades pequeñas cuya gestión sea pública, evitando la privatización del sistema carcelario.

- Promover medidas sustitutivas a la privación de libertad. Establecer un sistema eficaz de prisión domiciliaria para mujeres, garantizando el acceso a

derechos fundamentales, y contemplando las necesidades especiales de las mujeres madres con hijas e hijos a cargo.

- Evitar el encierro compulsivo e implementar actividades educativas y laborales dentro y fuera de los establecimientos carcelarios".

Hay un punto específico en relación a las mujeres privadas de libertad que da cuenta de:

"Mujeres privadas de libertad:

- Evitar la aplicación de la pena privativa de libertad para las mujeres, cuando su vulnerabilidad socio penal y la entidad del delito cometido lo ameriten, y aplicar un régimen de prisión domiciliaria asistida por los organismos competentes para la rehabilitación y reintegración social. En concordancia con las normas vigentes, en especial de los artículos 228, 304 y 305 y concordantes del CPP, junto a las normas del sistema internacional que conforman la perspectiva de derechos humanos y género.

- Garantizar condiciones mínimas de reclusión como establecen Convenciones y Tratados a los que Uruguay adhiere, como la Convención de Belem do Para, en especial las Normas Mínimas para el tratamiento de las Mujeres Privadas de Libertad, denominadas 'Reglas de Bangkok'.

- Derogar el artículo 77 de la LUC que establece como agravante cuando el delito de venta de drogas tiene como lugar material el hogar. Reducir el número de mujeres privadas de la libertad por delitos relacionados con el microtráfico de drogas".

La pregunta 2: "¿Qué papel considera que pueden desempeñar las medidas alternativas a la privación de libertad", no tiene respuesta.

La tercera pregunta sí:

"3. ¿Qué medidas se deberían instrumentar para fortalecer los mecanismos de egreso o para evitar el ingreso y/o la reincidencia a la cárcel? (suspensión condicional de la pena, libertad anticipada, redención de pena, políticas sociales)

- Derogar el artículo 34 de la LUC, que elimina la suspensión condicional del proceso y reduce los mecanismos de justicia restaurativa.

- Eliminar el proceso simplificado como un procedimiento que limita las garantías procesales de las personas imputadas.

- Cumplir con las garantías procesales y procedimentales relativas a los procesos abreviados, garantizando la asistencia letrada a las personas imputadas.

- Promover el desarrollo de medidas alternativas a la privación de libertad.

- Brindar los recursos necesarios para garantizar el adecuado acceso a una defensa pública.

- Establecer un sistema articulado interinstitucionalmente para ofrecer un acompañamiento integral a las personas que egresan de la privación de libertad acorde a sus necesidades en materia laboral, educativa (donde se permita garantizar la continuidad del proceso transitado en el encierro; apoyo

para continuar estudios universitarios, técnicos o secundarios), de vivienda, y revinculación social y familiar".

SEÑORA GONZÁLEZ (Claudia).- Con respecto a las medidas alternativas nosotros, los defensores, tenemos un grave problema

Son personas, en general, que son condenados primarios. Se los condena en libertad a prueba. La idea es que ellos puedan firmar en la seccional y hagan trabajo comunitario, pero el problema que tenemos es que ellos no pueden sostenerlo. Es obvio que ellos quisieran ir, no porque no tengan hábitos de trabajo. Hay personas que no pueden sostenerlo porque son adictos, tienen problemas de salud mental o son pobres y no tienen para el boleto. Esa es una realidad.

Tenemos muchas libertades a prueba revocadas y esas son personas que reinciden; a veces están revocadas por la reincidencia y muchas veces no, porque no pueden sostener lo que se les plantea o no se contemplan sus realidades.

Por ejemplo, hay una circular hecha por el Ministerio del Interior -creo- y la Suprema Corte de Justicia, en la que se determina dónde tienen que ir. A ver si me explico. Yo puedo vivir en el Centro, pero por un tema de organización del Ministerio del Interior tengo que ir a firmar a la seccional de Pocitos. Entonces, la seccional de Pocitos reúne varias seccionales y las personas no tienen dinero para acceder a boletos para ir a la seccional, porque en muchos casos eso implica dos boletos. Esta es la realidad de las personas que están condenadas.

El otro día tuve un muchacho que tenía que pasar por un campo para acceder a la seccional, y eso no está contemplado. Nosotros vemos que a veces son normas que se hacen desde los escritorios sin tener en cuenta a las personas; esa es una realidad. Para que una persona pueda ir tiene que acceder a mí, lo que no le es tan fácil, aunque yo le diga: "Yo estoy acá, en la Ciudad Vieja; tenés mi celular". Pero esa persona a veces no tiene dinero para ir a mi oficina y tampoco tiene acceso a un celular, y pedirle al juez que me autorice que pueda ir a firmar a la seccional que le queda a dos cuadras, cuando por esa circular se dispuso que tiene que ir a la que le queda a treinta cuadras, son cosas que entiendo que no contemplan a las personas. Eso hace que no puedan ir a firmar y no firmen. Entonces, la OSLA (Oficina De Supervisión de Libertad Asistida) informa que hay incumplimiento; la seccional informa que no cumple. Se dice: "Bueno, vamos a llamarlo, vamos a ver por qué no cumple". Cuando ubican a la persona a veces está presa, de vuelta, y es como un tsunami; así estamos nosotros y también ellos.

Esto es lo que puedo aportar, sin pensarlo mucho; es lo que me viene a la mente, y las medidas alternativas son necesarias. También creo que lo que deberían hacer -capaz que hablo de un mundo perfecto, pero creo que tenemos que aspirar a hacer lo mejor que se pueda- es acompañar a esas personas, porque cuando salen del juzgado y le damos el teléfono del defensor de ejecución, le damos la dirección de la OSLA y de la seccional a la que va a tener que ir, ellas no pueden sostener esos aspectos. Yo sé que la OSLA tiene muy pocos funcionarios, pero tal vez debería haber un grupo que pueda acompañar a esas personas, alguien que los ayude, que les diga: "¿Por qué no vas?", o "Yo voy y hablo con el abogado, hablo en la seccional o hablo en la

OSLA", para que tengan otras herramientas. Me refiero a asociaciones o a gente que desde el Estado pueda hacer esos acompañamientos para que ellos no estén solos porque, muchas veces, nosotros sabemos que van con un acuerdo abreviado de una libertad a prueba que firmaron porque no querían ir presos. Y si, ya está, el delito fue cometido, pero sabemos que en unos meses va a pasar lo mismo; no lo pueden sostener. Ellos están muy solos en eso. Entonces, las medidas alternativas son necesarias, pero hay determinadas personas que requieren otro apoyo.

No me quiero extender ni ser repetitiva.

SEÑORA REPRESENTANTE MATO (Verónica).- Quisiera hacer un aporte con respecto a este tema.

Como decía, leí las versiones taquigráficas y el director de la Dinasta -anterior OSLA- planteaba lo mismo que tú en cuanto a las dificultades que se podían tener si quizás alguien no cumplía, y no porque no tenga la voluntad, sino porque no tiene los medios.

Creo que en este tema de las penas alternativas es fundamental contemplar las desigualdades de las personas, porque si no solamente van a poder acceder a las medidas alternativas aquellas personas más ricas, que cuenten con la posibilidad de tener una familia que quizá tenga un auto o plata para el boleto. Solamente el hecho de tener una contención familiar, de tener lo afectivo, de tener un sostén, es de una gran riqueza -más allá de lo económico-, o tener lo más mínimo, como lo es una vivienda. Eso se ha planteado también; es decir que si las personas no cuentan con una vivienda no pueden terminar sosteniendo la libertad asistida.

Entonces, sobre eso que comentaba la Defensoría de Oficio, yo creo que es fundamental poner el centro en las personas. El concepto de ejecución penal debe tener en cuenta eso que se decía en cuanto a que las cosas se resuelven desde un escritorio y no se contempla la dimensión humana, y también cómo el Estado genera los mecanismos para que esto se dé a través de lo interinstitucional, para que realmente dialoguemos entre todos. Por eso vuelvo a repetir la importancia de estas reuniones.

SEÑOR DELPRATO (Pedro).- Capaz que reforzando no tanto específicamente lo que hace al sistema penitenciario, pero sí lo que hacen estas situaciones, no solo me referiría a las condiciones materiales de accesibilidad, sino también a los sistemas de comprensión. Por lo menos a nosotros también nos pasa que partimos de una idea de que del otro lado hay una capacidad de abstracción que va a entender algunas cuestiones y, en realidad, en muchos casos hay miradas muy concretas sobre la realidad y sobre lo que pasa y la comprensión es muy relativa.

No sé si lo que decías hace *match* con esto, pero es un tema de cuánta presencia del sistema educativo tuvo la persona, de cuánto espacio de socialización tuvo. En esto del acompañamiento de las familias es una realidad que muchas veces más allá de que las personas pueden tener cierto lugar de referencia, debemos considerar qué tanto es diferencial para que las personas se sientan acompañadas, porque en muchos casos la mirada es la misma. Entonces, más allá de que las personas puedan estar en un ámbito familiar o que tengan algún espacio de referencia, igual la soledad opera de la misma

manera en el sentido de que la mirada es igual. Por lo tanto, no es que haya un acompañamiento o una caja de resonancia en la que puedas tener otras miradas, sino que el punto de partida y el punto de vista va a ser el mismo sean uno, tres, cuatro, o los que sean.

Entonces, de alguna manera, si bien estos procesos de soledad son fuertes, en muchos casos -es una tendencia que está habiendo: la soledad en general-, justamente, en esto de las penas alternativas el poder pensar en procesos de mayor cercanía tendría que ser un eje central para que las personas no estén tan solas frente a estas situaciones y también puedan encontrar planes de salida en ese proceso. Si lo único que cambia es una sanción, lo más probable es que las condiciones materiales no cambien absolutamente en nada, siga pasando lo mismo que ya pasó y se repitan las conductas.

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gabriela).- Disculpen la llegada tarde. Lamento haberme perdido la fundamentación de las ausencias; por lo que pude llegar a ver algunas son definitivas, otras son temporales y algunas las desconozco, así que al finalizar la reunión me enteraré un poquito más de eso, pero sinceramente me preocupan.

Nosotros, como habíamos anunciado en la sesión pasada, vamos a elaborar, como asociación, un documentito que abarca toda la pauta.

Aportando algunos elementos vinculados a la tercera pregunta del primer bloque, yo diferenciaría entre las medidas alternativas a toda la pena de aquellas medidas que, en realidad, son derechos, en muchos casos eliminados, relativos a situaciones sobre libertades anticipadas, redenciones de penas y salidas transitorias, incluso.

En estos últimos casos, ¿cuáles son las medidas que deberían instrumentarse para fortalecer los mecanismos? En primer lugar, la mejora de las condiciones internas de privación de libertad, una vez más. La preparación del egreso tiene que empezar el día que la persona ingresa; ni seis ni ocho meses después. Sí; habrá que empezar -como se ha empezado- seis meses antes, pero que sea el comienzo, porque si vamos a pensar que, de aquí en más, solamente vamos a trabajar los últimos seis meses con la gente, no estamos hablando de rehabilitación, no estamos hablando de que queremos cumplir con la Constitución, sino que estamos hablando de que queremos que salgan un poquito menos mal nada más, por el bien de los demás y no por ellos.

Entonces, otra vez tenemos que pensar desde qué lugar queremos trabajar, desde qué paradigma nos paramos, si realmente queremos abatir el punitivismo y nos queremos parar no desde el castigo sino desde la rehabilitación, y para ser coherentes con eso, ¿cuáles son las medidas que tenemos que pensar?

Si esa es la perspectiva, si el trabajo empieza el primer día para que pueda acceder de buena manera, cuando llegue el momento, a una salida anticipada, a una redención o a una transitoria, deberá tener, en primer lugar, atención de salud mental y atención de adicciones. Eso se dará si es cierto que los datos que tenemos de que aproximadamente el 70 % de las personas privadas de libertad -que no se fundamentan claramente todavía hasta donde

sabemos en evidencia, pero parecería ser así-, tienen problemas de adicciones o de salud mental. Esa es una emergencia y hay que tratarla desde el vamos.

Después, tendrá que haber acceso a trabajo y a estudio. En realidad, en el único lugar donde no es universal el derecho a la educación y el derecho al trabajo decente es en la cárcel, más allá de que todos decimos que la cárcel lo único que le elimina a la persona es la libertad. Sin embargo, por ley el trabajo no es decente en las cárceles, porque la gente trabaja sin seguridad social, la gente trabaja sin un laudo, la gente trabaja sin ni siquiera acceder a un salario mínimo, porque el peculio para los poquititos que acceden es medio salario mínimo y, en realidad, como país, eso está normado.

Lo mismo sucede con la educación porque la Ley General de Educación dice que todas las personas tenemos derecho a la educación como un derecho humano fundamental, a lo largo de toda nuestra vida. Sin embargo, en las cárceles no todas las personas, aunque tengan interés, logran acceder a un lugar para estudiar.

El año pasado sucedió que mil y pico de personas, aunque manifestaron interés, no pudieron acceder a primaria o a secundaria. Este año se suma la UTU y tampoco han podido acceder. Digo esto pensando solamente en la educación primaria y media. Esos son los primeros elementos en los cuales vamos a tener que trabajar para el sistema penitenciario todo y también si queremos pensar en estas medidas en buena manera.

En cuanto a la suspensión condicional de la pena -que nosotros también pensamos que en muchísimas situaciones debería ser la medida, además de pensar que hay hechos que deberían ser considerados un delito, pero esa es otra discusión-, con la normativa actual de que son delitos, la medida debe ser la cárcel. Si la medida no es la cárcel y son medidas condicionales, estoy totalmente de acuerdo con que tienen que haber otros procesos de trabajo y de acompañamiento durante todo el proceso con la persona.

Sinceramente, a veces a uno le duele tener que decir esto o hasta tener que escucharlo porque parece de Perogrullo que, sea cual sea la persona que tenga sus derechos vulnerados, el proceso no lo pueda hacer solo; siempre lo va a tener que hacer acompañado de políticas públicas acordes y de equipos técnicos acordes. Así que, en ese sentido, estoy en pleno acuerdo.

Por otro lado -también va a estar en el documento que vamos a presentar, ojalá que sea en la próxima reunión-, hay todo un capítulo vinculado a la familia y al entorno, llámese barrio o territorio. La familia cuando existe y la familia cuando no está presente porque ya se rompieron los vínculos, porque hay lejanía.

Si la persona está privada de libertad, ese trabajo de revinculación familiar -reitero- no puede empezar seis meses antes; tiene que empezar el día que la persona entró en privación de libertad. De lo contrario, seis meses o una semana antes de la liberación difícilmente vas a tener a esa familia en condiciones de querer acompañar a esa persona. Cuando se trata de libertad condicional, sucederá lo mismo, y en muchos casos es real que no hay familias.

Las personas a algún lado van, porque no quedan en el éter. Entonces, ¿qué lugar tienen los barrios? ¿Qué lugar tiene la institucionalidad pública de

cada territorio para contener y acompañar a esas personas? ¿Qué lugar tiene la sociedad civil organizada de los distintos territorios? Creo que tenemos que empezar a hacer jugar la dimensión familiar y la dimensión comunitaria o territorial dentro de las políticas vinculadas al sistema de ejecución penal, y ya no solamente del sistema penitenciario.

SEÑORA VIGNA (Ana).- Solo quiero realizar unos breves comentarios.

Con respecto a la segunda pregunta referida a qué papel considera que pueden desempeñar las medidas alternativas a la privación de libertad, creo que deberían jugar un papel clave en la medida en que, efectivamente, se conformaran como alternativas a la privación de libertad.

Todos estamos de acuerdo en que el sistema de medidas alternativas en nuestro país es muy débil, aunque se han incorporado algunos cambios recientes como la transformación de la Dirección Nacional, la incorporación de nuevos funcionarios y demás. Lo que tiene que ver con la debilidad del acompañamiento es claro. Eso lleva a una especie de círculo vicioso en el que las medidas fallan muchas veces, ya sea por reincidencia o por incumplimientos, y es como una profecía autocumplida, porque termina alimentando el descrédito de los operadores del sistema y de la opinión pública respecto a algunos casos paradigmáticos fallidos en los cuales las medidas alternativas no funcionaron.

Entonces, está claro que hay que invertir en el desarrollo de estas medidas para que, efectivamente, se logren consolidar como alternativas a la privación de libertad, pero para que logren consolidarse como alternativas también tiene que haber cambios legislativos. Creo que se mencionó la suspensión condicional del proceso, la posibilidad de cumplir la pena a través de mecanismos alternativos a la prisión. Por más que el sistema de medidas alternativas funcionara de buen modo y no hubiera gente o poca gente presa por incumplir esas medidas, de todos modos tendríamos niveles de encarcelamiento muy altos.

Otro tema al que me quiero referir es el de la articulación interinstitucional. Acá se mencionaba el papel de las familias, pero también mencionaban otras necesidades como, por ejemplo, las vinculadas a la vivienda, a la inserción laboral y demás.

Creo que estaría bueno empezar a pensar en mecanismos de articulación interinstitucional que trasciendan un poco la gobernanza, tanto del sistema penitenciario como de las medidas alternativas, centralizada en la Institución Nacional de Rehabilitación y hubiera participación más directa y articulada de otros actores que tienen que ver con las políticas, tanto dentro de la privación de libertad como en el medio libre.

En cuanto a la tercera pregunta relacionada con los mecanismos de egreso, estoy totalmente de acuerdo en que, en realidad, el proceso de egreso debería empezar el día que comienza la prisión. O sea, se debería trabajar a lo largo de toda la privación de libertad con miras al momento de la salida.

Con respecto a los mecanismos, creo que lo que pasa en nuestro país es que hay un corte muy abrupto entre lo que es la cárcel y el día después. Aclaro que en otros países hay casas de medio camino o un uso más generalizado de las salidas transitorias, que es otro mecanismo que tenemos y

del cual se hace poco uso en nuestro país, que hace que ese quiebre entre la cárcel y la vida en libertad sea muy fuerte. Eso está muy asociado -más allá de las trayectorias vitales- a las trayectorias delictivas. Entonces, gran parte de la reincidencia se concentra en los primeros meses luego de la salida en libertad.

Está claro que el fortalecimiento de las políticas pospenitenciarias también debería ser un elemento fundamental para acompañar estos procesos luego de que la privación de libertad se termina.

SEÑORA GONZÁLEZ (Claudia).- Estaba mirando que una de las preguntas dice: "¿Qué medidas se deberían instrumentar para fortalecer mecanismos de egreso?".

La suspensión condicional de la pena, no la tenemos; libertad anticipada, no se da; casi no hay; son muy pocos los que acceden. Hace un año y medio que ejerzo en la Defensoría de Ejecución Penal y creo que tuve un caso. A veces se da más por una empatía del juez que se compromete con la situación; pero si no, vienen todas negadas.

En cuanto a la redención de la pena, también estamos luchando por buscar algún mecanismo que en determinadas situaciones se puedan redimir. Como saben, si cometen algún delito de tráfico de estupefacientes, no pueden redimir, pero a veces si cometen algún otro tipo de delito entendemos que pueden. Hay jueces que entienden que corresponde y jueces que entienden que no corresponde. Entonces, tenemos privados de libertad que redimen, privados de libertad que no redimen y eso lleva a que digan: ¿Por qué él puede y yo no? ¿Por qué?

Todos esos mecanismos de egreso son muy frustrantes para nosotros y para ellos más, que son quienes lo padecen.

Tampoco sabemos qué calidad tienen los informes que vienen del INR. Muchas veces vemos que se repiten. No pongo en duda el aspecto técnico de la persona, pero en el volumen vemos que se repiten, entonces no sabemos si realmente está pensado en esa persona. Todos vienen con altos índices de reincidencia y son todos informes negativos. Claramente, ninguno viene positivo, porque no pueden trabajar o quieren trabajar y no acceden a plazas de trabajo, no acceden a plazas de estudio y muchos no están accediendo a situaciones básicas de comida, pasan hambre. Es una realidad; a veces se quejan de que en vez de darles dos panes le dan uno; están empezando a sentir eso.

Realmente, creo que hay que cambiar en muchos aspectos. Hubo retrocesos en los derechos, hubo retrocesos en institutos liberatorios, en todo lo que favorece la reinserción y que las personas puedan mejorar, o inclusive estar ahí mismo, porque a veces para ellos es una esperanza poder redimir, es una esperanza tener el trámite de libertad anticipada; es muy importante para ellos. Asimismo, es muy frustrante cuando no pueden acceder; y hay personas que ni siquiera pueden acceder al trámite de libertad anticipada.

Creo que desde el aparato político, de los políticos, habría que hacer un cambio de la normativa, que se ha endurecido tanto que no contempla, porque ya no se trata de la pena, sino que es castigar por castigar; hay que castigar a estas personas y generarles un sufrimiento. No podemos entender la pena

como un sufrimiento. Eso es lo que se está viviendo hoy en las cárceles; creo que la pena hoy es sufrimiento y no es rehabilitación ni nada.

SEÑORA MODERADORA.- Le voy a realizar una pregunta a Claudia.

Tú dijiste que prácticamente las libertades condicionales vienen todas denegadas. Quisiera saber si ustedes tienen algún mecanismo de medición o tal vez no; quizás es una corazonada y no es metodológicamente exacto el porqué o en qué se fundamenta esa negativa a la habilitación de una anticipada.

SEÑORA GONZÁLEZ (Claudia).- En general, vienen negados porque les marcan un índice de reincidencia alto; o sea, viene el índice de reincidencia alto y en eso se basan. No sabemos qué fundamento tiene ese índice; son números y no sé cómo lo marcan los técnicos. Reitero: en general es porque siempre viene el índice de reincidencia alto, pese a que la persona trabaja o estudia. Uno tiene un trato con la persona y sabe que tiene herramientas, que tiene familia y piensa: "Bueno, ¿por qué no le podemos dar una oportunidad?". Las oportunidades no aparecen, no están y cumplen toda la pena. Nosotros, como defensores, tampoco recurrimos a esas libertades anticipadas, aunque podemos hacerlo -hay que ser autocríticos; no tenemos culpa de todo; estamos todos en la bolsa-, y no se recurren porque nos basamos en ese informe.

Entonces, yo, como defensora, aunque tenga los medios o alguien que me asesore, no tengo la capacidad para decir desde qué lado puedo cuestionar este informe como abogada. Yo soy abogada, no sé de un informe técnico que me hace el INR, y no tenemos técnicos que nos ayuden a decir: "Vamos a cuestionar este informe. Yo quiero cuestionar este informe". Pero no tengo eso ni tampoco tiempo, porque tenemos miles de cosas.

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gabriela).- Yo quería retomar algo que dijo Ana y que ahora también planteó Claudia en cuanto a este sistema perverso que tenemos y cómo incide al momento de las evaluaciones para medidas alternativas, suspensiones condicionales, anticipadas, redenciones o transitorias. Difícilmente una persona pueda tener un buen informe cuando no ha tenido posibilidades de acceder a estudiar, a trabajar, a ir a una cancha de fútbol, porque cada vez las expectativas son menores como tener una hora de patio por día.

La persona se inscribe, quiere hacerlo, se lo aprueban, no lo llaman, pide un traslado, a veces, ni siquiera de unidad penitenciaria, sino de módulo dentro de una cárcel y le dicen: "Sí, bueno, cuando empieces a estudiar o a trabajar, te evaluamos", pero pasan los meses y la persona no es llamada para empezar a estudiar o a trabajar. Entonces, pasa el tiempo, la persona no puede redimir y no puede tener acceso a un buen informe. Entonces, la progresividad no funciona, no existe en la realidad.

Entre las cosas que discutimos y planteamos están los procesos de evaluación y elaboración de tratamientos adecuados e individualizados, y a partir de ahí cuál es el proyecto para la persona y cómo lo vamos a ir evaluando para que la persona, efectivamente, acceda.

Pensar en el egreso nunca puede estar independizado de las condiciones de todo el proceso y de cómo se concibe el encierro como modelo.

Me pareció importante resaltar esto.

SEÑORA MODERADORA.- Quisiera hacer un aporte relacionado con eso.

Cuando hablamos en términos de justicia penal juvenil, por ejemplo, una de las cosas que se exige es la pena individualizada, que el proceso de abordaje sea individualizado, que las decisiones sobre la educación y las posibilidades laborales sean individualizadas. Eso lo exigimos nosotros, incluso desde las recomendaciones a los equipos técnicos relacionados con la justicia penal juvenil.

Siento que, a veces, eso se pierde un poco de vista al momento de hablar de adultos. El sistema penal adulto muchas veces es mucho más homogeneizante y se pierden estas cuestiones que tienen que ver con la individualización de las distintas oportunidades y el tratamiento de cada una de las personas privadas de libertad.

Al respecto, me gustaría hablar -luego lo podrán leer- sobre la Opinión Consultiva N° 29 de la Corte Interamericana que, precisamente, hace referencia a la aplicación de medidas diferenciadas. Si bien la opinión hace referencia a algunos colectivos, como niñas y niños en privación de libertad con sus madres o referentes -por ejemplo, en Brasil las niñas y niños pueden permanecer junto a sus referentes varones, algo que en Uruguay no sucede-, también hacen referencia a otros colectivos, como el LGTBQI+ y a las mujeres privadas de libertad. No queda allí la interpretación en materia de derechos humanos; es una interpretación que se debe realizar tratando de ampliar esas categorías. Si bien esa opinión da cuenta de esos colectivos, me parece un recurso superinteresante, un aporte, un insumo más para poder pensar la respuesta que se da a la persona que tiene privación de libertad desde una perspectiva diferenciada en el marco de los derechos humanos.

SEÑORA PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES (Ana María Olivera Pessano).- Les pido disculpas -porque siempre me molesta las personas que hablan y después se van-, pero no tengo más remedio que irme, ya que era la única hora posible en toda la semana para recibir a este embajador.

La práctica que yo tengo -Petit lo sabe- es que recibo a las familias que me llaman para plantearme la situación. Verónica integra el equipo de seguimiento, pero Petit sabe que lo molesto bastante de manera frecuente con diversas situaciones terribles como denuncias por hacinamiento, las ratas, las condiciones, la necesidad de traslado para el interior porque la persona es del interior y la familia tiene dificultades para llegar acá, etcétera.

Comparto totalmente lo que se discutió en la primera reunión y lo que aquí se plantea. Estamos analizando las consecuencias y no estamos analizando las causas de por qué tenemos tanta cantidad de personas privadas de libertad, un número que sigue creciendo.

El otro día, en la discusión general, lo planteé como punto de partida, porque esto lo vamos a tener que evaluar. Hace unos días recibí a la Universidad de la República, quienes hicieron una primera evaluación -esto requiere tiempo- sobre el tema de la aplicación de Ley de violencia hacia las mujeres basada en género. Fue una primera evaluación, porque esto requiere tiempo. Hablaron de cómo se comporta el Poder Judicial, las posibilidades de

la Defensoría, que son mínimas -lo plantean en el informe-, de cómo están funcionando todas las modificaciones que se hicieron que, para mí, están basadas en un paradigma perimido -lo digo porque esto es algo en lo que deberíamos aportar-, que consiste en pensar que hay mayor seguridad cuanto más cantidad de penas hay. Digo esto porque me tocó participar en todo el debate de la Ley de Urgente Consideración y también en el debate con la ciudadanía sobre el tema. En realidad, ese sentido común que se fue formando acerca de que la seguridad está basada en que la gente esté presa -disculpen que voy a decir algo con lo que capaz que no están de acuerdo-, es lo mismo que resolver el problema de las personas en calle, levantándolas y poniéndolas en un lugar. En este caso, menos aún, porque la persona no está privada de libertad, o sea que si quiere, después se va y punto. Pero, en este caso, que no se puede ir, se va generando eso.

No tenemos condiciones y, además, ¿cuáles son las medidas que se toman desde el inicio? El primer punto es evaluar: ¿Cuál es el resultado de este incremento de penas? ¿Cuál es el resultado de todo lo que ustedes acá plantearon en cuanto a la no redención, etcétera? ¿Qué medidas tenemos para paliar esta situación? ¿Se está produciendo, realmente -voy a lo que planteaba Gianina en cuanto al sistema penal juvenil, que creo que, lamentablemente, y sobre todo con la pandemia, se perdió mucho-, el trabajo individualizado y, sobre todo, con el tema de la educación?

Yo visité la Colonia Berro el año pasado. Conozco bastante ese proceso, y las dificultades de acceso a la educación se habían incrementado, por lo que nos dijeron allí los propios responsables de los distintos centros.

¿Cuáles son las posibilidades reales que hay, por ejemplo, de acceso a la educación? En el caso del Inisa hay un proceso de derivación, que desde mi punto de vista también se ha desvirtuado. ¿A dónde va? ¿A qué centro va? ¿A qué lugar va? Nosotros, aquí -me pueden corregir ustedes que tienen más experiencia- hemos tenido algunos casos que tomaron estado público importante de personas primarias que cayeron en determinados lugares. Uno se pregunta ¿cómo llegaron a ese lugar? ¿Cómo llegó a ese lugar un primario y pasó tanto tiempo sin que nadie se diera cuenta en las condiciones en las que estaba? Todos saben de lo que estoy hablando. Entonces, en cada uno de los pasos me parece que hay elementos para visualizar.

Y después, yo comparto el criterio que aquí se dice en el sentido de, una vez que ingresa -en el caso en que es indefectible que tenga que ingresar a la privación de libertad-, cuáles son las posibilidades reales que tiene de trabajar el egreso desde el inicio. Ahí también hay experiencias que en muchos casos han sido positivas y que tenemos que analizar, además de las experiencias positivas del trabajo adentro, pero lo que digo es la posibilidad de generar, como se hizo en el Inisa, en los últimos seis meses de privación de libertad, la posibilidad de convenios con instituciones públicas y privadas que le den la posibilidad de insertarse en el mundo del trabajo y al mismo tiempo, continuar un tiempo más después de la privación de libertad.

No todo es igual. Estoy planteando variantes de temas que en el caso del Inisa nos dieron mucho resultado; nos dieron resultado hasta de inserción permanente después de la privación de libertad, y siempre pongo el mismo ejemplo -discúlpennme, pero para mí fue muy importante-, que es lo que se hizo

con la empresa Codere, con el Hipódromo. ¡Y los gurises que quedaban después trabajando en el Hipódromo! Un 20 % quedaba trabajando; vaya si eso era importante. Entonces, existe esa posibilidad; porque lo otro que sucede es que si vos no trabajás esa parte de la inserción desde antes, salís a la nada, y sobre todo sale a la nada aquel que no puede volver ni al barrio, ni a la casa, ni a ningún lugar. Entonces, también hay un proceso que hay que cumplir.

Disculpen, pero no tengo la experiencia de ustedes; tengo otra desde otro lugar, y también hay un elemento que es invisible, que es el trabajo con las familias -acá está Familias Presentes-, el impacto que tiene en las niñas y los niños. Hay varias instituciones de Anong que han trabajado esta temática. Uno va al CAIF Casilda, en Marconi, y miren los dibujos que hacen los niños y las niñas, que uno piensa que están en la plaza, y no, están en otra plaza, no en la plaza de nuestros sueños.

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gabriela).- Quisiera aportar un elemento más a lo que es el bloque uno, pero aludiendo a lo que Ana Olivera planteaba.

Nosotros, como asociación, una de las cosas que nos planteamos es que si bien nuestra preocupación es por el adentro o por las medidas alternativas de nuestros familiares que están privados de libertad o que tienen algún tipo de sentencia para cumplir, claramente, nuestros derechos y los de nuestros familiares no están contrapuestos con los derechos del resto de la sociedad. Entonces, como asociación, nos duelen tanto la privación y las condiciones de privación de nuestros hijos en general o parejas como los niños que están muriendo en estos días, la cantidad de homicidios que se están dando en los barrios en estos días. Por eso integramos la plataforma PIAs, por eso trabajamos con distintas organizaciones que están muy preocupadas por el tema de la violencia, porque somos causa y consecuencia, somos todo uno, y eso es lo que más queremos trabajar con la sociedad, que no somos unos y otros, sino que somos una sociedad que estamos teniendo estos problemas, a algunos nos toca vivirlos desde un lugar y a otros, desde otro, pero aunque no lo queramos creer, somos parte de un todo.

Entonces, en este sentido, solamente quiero agregar un par de cosas, que es la incorporación de justicia terapéutica, ni que hablar, por esto que nosotros decimos, que es ¿cuántas de las personas que están presas, en realidad, deberían estar haciendo un tratamiento de salud mental o de adicciones en otro lugar que no es una cárcel, que es un centro de rehabilitación adecuado a su condición? Y también quiero incorporar lo que tiene que ver con la justicia reparatoria o restaurativa, porque, en realidad, difícilmente podemos trabajar la rehabilitación y el desistimiento del delito si no hay una responsabilización de la persona que cometió un error con la sociedad. Y si hay algo que no se está trabajando -y de lo que estamos muy lejos- es en esos aspectos; y no sé si en muchos casos no se termina reforzando la conducta que la persona cometió. Yo creo que en justicia penal juvenil se ha avanzado, hay experiencias, pero en adultos, no. Entonces, no serán de las primeras medidas, pero creo que eso lo tendríamos que tener en el horizonte.

SEÑORA GONZÁLEZ (Claudia).- Cuando dicen "adultos", estamos hablando de adultos de dieciocho, diecinueve, veinte, veintiún años; o sea, son niños; son jóvenes menores de veintitrés años, veinticuatro. Son todos muchachos muy jóvenes los que están en la cárcel y están viviendo esto.

Otra cosita que quería agregar en cuanto a lo que afecta a los niños es que no se tiene una perspectiva desde la mirada de los niños, del interés superior del niño. Voy a dar un ejemplo de la defensoría. Fue una mamá con la nena, no le dan la salida transitoria al papá y cuando se van escuchamos que la nenita pregunta: "Mamá, ¿por qué no le dieron la transitoria a papá?". O sea, ¡es redoloroso eso! ¡Fijate desde ese niño que está viviendo eso! ¿Qué le iba a decir esa mamá? Entonces, todo esto afecta.

En una charla que hubo hace poco en Siembra, una exponente decía que la cárcel se mete en el living de las familias, se mete en la casa, en el comedor, y es tal cual. Creo que hay que ver por ahí: los adultos, que son muy jóvenes; los niños a los que afecta todo esto, y hay personas que no deberían estar ahí por ese delito, debería haber otro mecanismo. O sea, no es la cárcel el lugar. Son adictos, robaron o hicieron lo que hicieron por su adicción; entonces, lo que necesitan es un tratamiento de drogas o un lugar donde se los asista en ese tema y no la cárcel, porque hoy en día las cárceles no los van a ayudar en nada.

SEÑOR PETIT (Juan Miguel).- Un par de comentarios nomás.

Creo que una de las cosas positivas dentro de un panorama bastante oscuro en lo que tiene que ver con el sistema penitenciario es este intercambio que se está dando entre distintas partes y que hay una cantidad de gente que está involucrándose en el tema, que está presente en el tema, haciendo propuestas, desde la sociedad civil, desde organismos del Estado, desde poderes del Estado.

Me acuerdo cuando esto empezó. Ya en el año 2000 el sistema penitenciario empezaba a dar muestras de que estaba muy mal, y estábamos hablando de seis mil presos o menos, la tercera parte de lo que hay ahora.

Entonces, nosotros tenemos tres elementos: la capacidad de dar tratamiento al sistema -que parece una palabra medio farmacológica, pero se refiere más que nada a la convivencia, convivencia rica, con cosas buenas, que desarrollen a la persona, que puede integrar un tratamiento de salud mental con medicación, etcétera, pero que incluye la convivencia con el deporte, la cultura, el aire libre, tomar sol, relacionarse con los demás, relacionarse con gente diferente, dialogar, resolver conflictos, etcétera-, el espacio físico donde eso ocurre y la cantidad de gente que está esperando eso. Ahí tenemos el gran problema del hacinamiento. Estábamos mal antes del hacinamiento crítico; ahora tenemos un hacinamiento para el que vamos a tener que crear una nueva terminología, tenemos un hipermegahacinamiento crítico porque en algunos casos estamos con una gran superpoblación. El INR se muestra muy proactivo en busca de soluciones, y acá los colegas del Parlamento que han ido lo vieron en muchas cárceles del interior, por ejemplo, donde hay gente hacinada al punto que hay doce en una celda con un baño. Entonces, como en esa infraestructura pueden salir al patio todo el día, no explota, pero hay lugares en los complejos del área metropolitana, con las situaciones más difíciles, en los que hay un hacinamiento muy grande. [Entonces, ese hacinamiento hoy tapa todo. Respecto a eso que ustedes decían de los informes, que me parece muy relevante, el sustento que tienen que tener la libertad anticipada y la salida transitoria es una muestra, una representación de la progresión y la proyección que ha tenido la persona ante la Justicia -que

tomó esa decisión de romper el principio fundamental, el principio general de la libertad e ir a la excepción, que es la privación de la libertad-, porque si se le presenta que está todo igual que antes, no va a cambiar. Entonces, se le tiene que presentar un informe contundente, denso, con una cantidad de elementos que muestren que esa persona está diferente a como estaba cuando se le aplicó la excepción a la norma, que es la libertad.

O sea, el hacinamiento es algo muy importante, muy grave, que arruina todo. A veces también huele a excusa: "No se puede hacer nada por el hacinamiento", pero sin entrar en honduras, el hacinamiento sin duda tiene que ver con las normas. Los colegas que van a estar en el armado del documento final, que después discutiremos entre todos, obviamente van a enfrentar el desafío de cómo plantear los temas sin -creo yo- llegar al grado de detalle que involucraría una cantidad de debates que sería difícil tener. No sé ahora, que algunas representaciones no van a estar.

SEÑORA PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES (Ana María Olivera Pessano).- Por eso yo proponía lo de la evaluación de las leyes como salida.

SEÑOR PETIT (Juan Miguel).- ¿Que hay que modificar normas? Yo concuerdo con lo que se señaló, con todos los aspectos que se señalaron: los mecanismos liberatorios, hay que rever el tema de la redención de la pena. A ver, al brebaje carcelario le venimos echando sal desde hace muchos años. No hay duda de que las últimas cucharadas de sal se las dio la Ley de Urgente Consideración, en muchos aspectos, hasta volverlo un brebaje absolutamente intomable, pero esa sal ya venía dándose desde muchos años atrás.

Hoy en día yo creo que la realidad nos muestra que el aumento de la población penitenciaria es absolutamente infinanciable, insoluble para cualquier gobierno. Hoy se tendrían que crear algo así como seis cárceles de quinientas personas, novecientos presos más por año. Tenemos un sistema que tiene datos que procesaron aquí los colegas, en particular, Santiago: aproximadamente un 40 % de las personas privadas de libertad tienen penas menores a dos años. Y ¿qué ocurre con esas personas que entran con penas menores a dos años? En general, no digo en todos los casos, debido justamente al hacinamiento hay una lógica, una ley carcelaria no escrita de que las actividades son para aquellos que están penando por penas más largas. Entonces, la persona que entra por ocho meses no va a tener prioridad ni para una comisión de trabajo, más allá de la mala calidad que tienen las comisiones de trabajo -que son de fajina, que no tienen sueldo-; o sea, cada cajita que vamos abriendo nos va mostrando que hay honduras que algún día se podrán resolver. Algún día estaremos en otro escenario, a España le llevó 15 años; algún día estaremos diferente. Sin duda que el hacinamiento requiere esas reformas legales; se buscarán y buscaremos la forma de transmitirlo, porque sin parar el hacinamiento, el ingreso permanente de personas a la cárcel, no es posible nada.

En cuanto a lo que decía Ana justamente de las causas, sin duda que hay un antes y un después que son muy parecidos, porque las personas vuelven a su barrio, a su familia, a su contexto; hay todo un tema de políticas sociales que hay que repensar. La visión que tenemos algunos es que hay un agujero importante en las redes de protección social en la adolescencia, en

esos niños en particular que son los de doce a diecisiete años y once meses, que son los adolescentes. Porque los niños tienen una cantidad de redes: Primaria, CAIF, pastores, merenderos, primeros cuidados, Jóvenes en Red, clubes de niños, etcétera. Para los adolescentes con familias disfuncionales, carenciados, etcétera, la red se amplía y el circuito "No estudio, no trabajo, no tengo conexiones, no tengo futuro. El delito me ofrece una cantidad de cosas interesantísimas; me ofrece una identidad, me ofrece respeto, me ofrece novios y novias, me ofrece plata en la mano" es muy tentador. Cuando queremos acordar tenemos, sobre todo varones, muchachos de veintidós años con una carrera delictiva y con veinticinco problemas de salud, heridas, lesiones, causas pendientes, etcétera.

Así que creo que el tema de los planes de tratamiento es estratégico. Los colegas se van a ver en figurillas, pero creo que es el gran desafío que el documento plantee esas cosas lo más concretamente posible. Tengo algún nombre para sugerir, porque obviamente como participante individual habría mucha gente que podría venir, pero creo que hay gente que nos puede dar alguna visión quirúrgica sobre las normas, sobre los planes de tratamiento y esas reformas legales sin las cuales no va a haber deshacinamiento.

Este es un tema muy sensible, muy polémico; en la campaña electoral al menor amague de hablar de menos presos, se dice: "Bueno, van a liberar; es una amnistía; es una desinstitucionalización". Ese tipo de debate poco ayuda; yo creo que nosotros podemos hacer un aporte con un documento que trate de encuadrar estas cuestiones en esa lógica.

SEÑORA REPRESENTANTE MATO (Verónica).- Continuando un poco con lo que decían Petit, Ana y todos, porque creo que vamos en la misma línea, yo recuerdo -no me acuerdo si fue el año pasado o el otro- que el comisionado presentó una encuesta -de Cifra, creo que fue- vinculada a las medidas alternativas y cómo la población las veía, que las veía positivas.

Creo que en esto que se hablaba del castigo, está sin duda la mirada de la ciudadanía a lo que es la cárcel, lo que representa. Creo que en el egreso también es fundamental tomar eso, cómo ve la ciudadanía al que egresa: "El que está en la cárcel, por algo estará", es un espacio de castigo total, y que también es importante la dimensión de la educación de la población con respecto a esto, qué significa estar en la cárcel. En la versión taquigráfica de la reunión pasada leí que se hablaba, por ejemplo, con respecto a la tuberculosis. O sea, todas las enfermedades que se pueden generar por el hacinamiento y cómo eso no es algo que está aislado del mundo: hay personas que trabajan allí, familias que van allí, niños. Es decir, es una dimensión que tiene que ver con la sociedad, no es un agujero negro, un tiradero de gente, porque esas personas después salen y hay que ver cómo salen.

Además, con respecto a lo que decía el comisionado sobre los adolescentes entre 12 y 17 años, casi 18, comparto totalmente con él en cuanto a que hay muy poca cosa. Pensemos también en esto de la inserción a ciertas economías; pensemos también en el suicidio. Estoy pensando en cosas que se podrían trabajar juntas, cómo prevenir esto y cómo prevenir también el suicidio, porque por no tener otras oportunidades o no ver horizontes posibles también pasa eso. Lo digo quizás desde la política para ver qué se puede instrumentar para que la sociedad entienda la importancia que tiene, que no es

un tiradero de gente, que estos problemas se resuelven también entre todos, que los problemas de seguridad no terminan en la cárcel. Creo que eso es fundamental.

Otro punto que me había anotado era fortalecer la Defensoría de Oficio, que para mí es fundamental, porque en las recorridas por las cárceles, la gran mayoría de las personas no saben ni quién es su defensor, y cuando uno ve la cantidad de defensores de oficio que hay para la cantidad de personas privadas de libertad, se da cuenta de que es imposible. Sí, claro, ni las conocen, ni saben, ni nunca las vieron, y no es problema de los defensores de oficio, sino de que no da el ratio. Así que para mí en ese caso es fundamental.

También es fundamental la mirada en lo que son los Nnapes (Niñas, niños y adolescentes con padres encarcelados), que Gabriela había dicho de convocar, porque las niñas, niños y adolescentes con adultos privados de libertad es la invisibilidad total cómo eso afecta en sus trayectorias de vida, cómo eso afecta también a los niños y niñas que están actualmente con sus madres, que es un fenómeno diferente, pero también es importante tener en cuenta. Más sabiendo la sociedad que tenemos, porque se habla del envejecimiento, pero si uno va a la cárcel, ve todas personas jóvenes, pobres y racializadas. Hay que decir por qué pasa esto. ¿Porque son las que más delinquen? No; son las que no tienen nada y terminan allí, también. Porque las personas que son más ricas tienen posibilidad de acceder a abogados particulares a los que les pueden pagar y pueden sacarlos, o a pericias u otro tipo de cosas.

Yo creo que el tema del acceso a la Justicia es fundamental. La Institución Nacional de Derechos Humanos hablaba de que para las personas mayores -me llamó mucho la atención- el acceso a la Justicia era algo que estaba dentro de sus vulnerabilidades. Tenemos que pensar en eso: en el acceso a la Justicia. Creo que nosotros nos hemos olvidado de eso y es un mar de desigualdades.

Perdonen, pero ya que estamos en este contexto electoral, si uno plantea que va a tomar medidas, va a escuchar: "¡Ay, vas a liberar presos!". Eso no te lo va a tomar ningún político. Ya es como una mala palabra. En realidad, es una mala palabra en el sentido de que la ciudadanía asocia que se resuelve la seguridad con la cárcel. Entonces, si nosotros ponemos la lupa en la cárcel por lo que está sucediendo, el resto de la ciudadanía va a tener una comprensión de qué cosas suceden. Si ese es un espacio de rehabilitación y no de castigo va a mejorar la seguridad.

SEÑORA GONZÁLEZ (Claudia).- Agradezco que hayan nombrado a la Defensoría.

Sí, hay presos que no ven a su defensor, y salen sin ver a su defensor. Eso es inaceptable, pero pasa.

Nosotros -buscando una estadística con los escasos recursos informáticos que tenemos en nuestro sistema de la Defensoría- aceptamos el cargo de unas 7.500 personas privadas de libertad, solo en el año 2023.

O sea que 7.500 personas pasaron por la Defensoría. Pero no se vieron esas 7.500 personas. Tomé un parámetro desde el 1° de enero al 31 de

diciembre. Tenemos más. Ese es solo del registro de: "Acepto cargo", "Acepto cargo", pero teníamos más. Entonces, es imposible poder verlas a todas.

En Montevideo, por ejemplo, somos solo doce defensores para toda la cantidad de presos, y creo que asistimos al 90 %. Somos doce personas. Nosotros, en la medida en que podemos, lo hacemos, pero estamos muy preocupados. El tema nos preocupa, no tenemos medios, no tenemos funcionarios, no tenemos procuradores. En mi caso soy yo, mi computadora, un celular y nada más. Esos son los recursos que hay hoy en día en las Defensorías.

En el interior la situación no es menos grave, tampoco. He hablado con defensores de Libertad, Maldonado y Cerro Carancho y ellos no solo tienen los presos, sino que hacen otras materias. Por ejemplo, las defensoras de Libertad tienen cerca de quinientos presos cada una, y aparte hacen turno de criminal, de lo que es la etapa de conocimiento. Tampoco pueden acceder y tienen problemas de acceso por videoconferencia. O sea que no accedemos a ellos y ellos no acceden a nosotros. Eso es grave e inadmisibile.

Nosotros tenemos que estar cada cierto tiempo en contacto y, a veces, cuando los entrevisto me preguntan: "¿Doctora, cuándo la voy a volver a ver?". Si fuera por mí les diría: "En un mes; ojalá pueda volver antes de fin de año, pero no te lo puedo asegurar. Te doy mi teléfono y tenés formas de comunicarte". Esa es la asistencia que se les está dando a las personas privadas de libertad.

A mí, en lo personal, y a muchos colegas comprometidos, eso nos tiene muy preocupados, y no hay respuesta desde el Poder Judicial a la Defensoría. No hay recursos, se sacan defensores de penal para otras materias. En Maldonado se sacaron defensores de ejecución para otras materias. Entonces, visten a un santo y desvisten a otro y así estamos. Y es cada vez peor la situación de las personas privadas de libertad.

SEÑOR PETIT (Juan Miguel).- Gracias a lo que plantea Claudia me parece que es muy relevante todo el tema del Poder Judicial. Yo voy a hacer una última gestión con un representante de la Suprema Corte, con uno de los ministros. Me parece que allí hay un rol político que la Suprema Corte no está cumpliendo. Me refiero a un rol político de diálogo de par a par con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo. Quizá no se da porque no tiene un enchufe directo, como puede ser un Ministerio de Justicia, por ejemplo, como para poder dialogar todos los aspectos que tienen que ver con la Justicia y no solamente la privación de libertad, que es uno de los aspectos más extremos, como decía hoy, porque es la excepción a la regla, que es la libertad.

Con respecto al tema de la Defensoría, capaz que Claudia nos puede aportar después, por escrito, en una próxima reunión, datos de ese océano de casos que tienen. Nosotros sentimos permanentemente el problema y el reclamo de los defensores.

Por otro lado, es muy visible como si bien el nuevo proceso adversarial se basa en el pilar democrático de que hay dos partes y un tercero resuelve -una parte que acusa y una parte que defiende y un tercero que resuelve-, en un rincón está Cassius Clay y en el otro un flaquito en harapos, porque la Fiscalía es de una enorme potencia de todo tipo, en cuanto a recursos

humanos, infraestructura, tecnología, comunicación, y pregúntenle a cualquier ciudadano dónde está la Defensoría y quién es su director, y no va a tener ni idea. Pero todo el mundo sabe, en general, qué es la Fiscalía y qué hace. Ahí hay un desnivel muy importante.

Dentro del Poder Judicial agrego -no sé si lo hablamos- al Instituto Técnico Forense, que es otra área importante. Creo que habría que escuchar su voz, o que vengan, aunque sea a título informal.

(Diálogos)

—Dijeron que no, bueno.

Reitero: gracias, Claudia, porque me parece que es importante esa mirada de la Defensoría. Si podés aportar más elementos e, inclusive, junto con otros colegas del gremio elaborar algún documento será más que bienvenido.

SEÑORA GONZÁLEZ (Claudia).- Por supuesto. Nosotros estamos muy preocupados, porque es muy grave la situación y no sé si no se dimensiona o no hay interés. Me sorprende que haya autoridades que no vengan; realmente no lo puedo creer.

Estamos muy solos; muy, muy solos. Y si nosotros estamos solos, las personas que patrocinamos están más solas.

Hoy estuve en contacto con muchos colegas buscando información de otras realidades para poder darles información, ya que es importante que la Defensoría esté en la carpeta porque se tiene que fortalecer. Es necesario, porque tiene que ver con los derechos de las personas. Como a veces se dice: tenemos que ser la voz de los que no tienen voz, y nuestra voz está muy débil.

Gracias.

SEÑORA MODERADORA.- Les agradecemos que hayan estado acá y compartido con nosotros sus opiniones.

SEÑOR DELPRATO (Pedro).- Quisiera aportar una cosita más.

Me había quedado pensando en esto de las políticas sociales, en relación a cómo están operando últimamente. En realidad, hay una cantidad de planes, programas, proyectitos, que dan posibilidades a distintos grupos de población. Pero lo que está pasando es que hay un paradigma que se cambió y ahora existen una cantidad de ventanillas; hay ventanillas para todo, pero no se va a buscar a la gente. | En eso sí creo que hay un cambio; capaz que hay que achicar la cantidad de ventanillas, pero sí tenemos que salir a buscar a las personas. Por ejemplo, en la cárcel muchas veces pasa lo que ustedes decían: las personas se anotan, pero tienen que esperar a que tengan lugar en la cola en función de cuándo se anotaron en la ventanilla, y no es que se las vaya a buscar. Estas cosas suceden en el adentro y en el afuera. La ventanilla por sí sola no resuelve nada porque, justamente, en cuanto a accesibilidad no se generan las condiciones para que se use. Entonces, muchas veces hay que educar en esa accesibilidad y para eso hay que salir a buscar a las personas en general, tanto a las que están adentro como a las que están afuera.

SEÑORA FERNÁNDEZ (Gimena).- Desde lo operativo pregunto: ¿en qué fecha será la próxima reunión?

(Diálogos)

SEÑORA MODERADORA.- El 31 de mayo.

SEÑORA FERNÁNDEZ (Gimena).- En esa fecha ya deberíamos entrar en las nuevas preguntas -o sea, la parte dos- que son sobre intervención penitenciaria efectiva. En ese sentido, cualquier cosa que quieran mandar para adelantar y compartir con el resto, será bienvenida. Nosotros vamos a charlar con Serpaj y con Amnistía si se quedan en la presentación por escrito o si vienen la próxima vez. En principio, también le estaríamos diciendo que vengan a Parodi y Saavedra.

(Se suspende la toma de la versión taquigráfica)

SEÑORA MODERADORA.- A modo de cierre, podemos redondear diciendo que hoy se abordaron temas a efectos de dar respuesta a la tercera de las preguntas, que tenía como objetivo pensar sobre las medidas a instrumentar para fortalecer los mecanismos de egreso, las dificultades que se afrontan en relación a aspectos normativos -que podríamos llamar principalmente aspectos de fondo- en cuanto a las posibilidades o no de modificaciones que ha habido en los últimos tiempos, y aspectos de repente más procedimentales que tienen que ver con la negativa de determinadas libertades y otras cuestiones que también son de fondo, pero que podrían estar lindando con los aspectos económicos que tal vez podrían abordarse en la instancia que viene. Esto lo digo a modo de referencia, y también destacando un poco lo que traía hoy Olivera Pessano, en cuanto a la diferencia numérica entre la cantidad de personal técnico que puede trabajar en Inisa, en relación a lo que es la ratio entre operadores o personal de trato directo y técnicos por un lado, y la cantidad de personas privadas de libertad.

La próxima reunión será el 31 de mayo, versará sobre intervención efectiva penitenciaria y en ese sentido también hay tres preguntas. La modalidad de trabajo va a ser muy similar a la que se tuvo para esta Mesa: vamos a dividir las primeras dos preguntas, y la tercera, seguramente, la abordaremos en la siguiente reunión -el 14 de junio-, dejando para la última de las mesas -que se realizará el 28 de junio- la cuestión presupuestal.

SEÑOR PETIT (Juan Miguel).- Yo dejaría una ventanita abierta para realizar, si se quiere, alguna sesión extraordinaria -una o dos- en la que podamos citar a determinadas instituciones o personas. No sé si en la lista que ustedes tienen para citar está, por ejemplo, el Sindicato de Operadores.

(Diálogos)

—Yo estaba pensado en los que hicieron el *habeas corpus* de la Unidad 5, con los que tenemos más contacto. Puede haber alguna otra persona o institución que se les ocurra a ustedes o a la Secretaría. Capaz que puede haber algún juez de ejecución que pueda dar un punto de vista o hacer algún comentario, aunque no venga la Suprema Corte. Cuanto más amplio sea esto, mejor.

Creo que también cuando se haga el documento, aunque no lo firme todo el mundo, simplemente podemos decir que fue consultada toda una lista de gente. Sabemos que parte del problema del sistema penitenciario reside en la falta de acumulación de pensamientos, instituciones y personas. Entonces,

yo creo que este efecto bola de nieve de mucha gente pensando, intercambiando, aunque al final el documento no lo firmen todos, es parte de la mirada a futuro, me parece.

(Se suspende la toma de la versión taquigráfica)

SEÑORA MODERADORA.- Damos por finalizada la reunión de hoy.

(Es la hora 16 y 2)